

Reseñas

Cristina Laurell, *Mexicanos en defensa de la salud y la Seguridad Social. Cómo garantizar y ampliar tus conquistas históricas*, México, Planeta, 2001, 118 pp.

VIVIANE BRACHET-MÁRQUEZ*

Este es un libro polémico. Es un libro que nos hace reflexionar, discrepar, asentir, y, también, enojar, porque revela, en pocas y simples palabras, el mal gobierno que nos ha afligido durante tantas décadas. Es un libro que protesta, que es de contestación y de rechazo ante lo que parece *moralmente reprehensible, socialmente injusto, técnicamente mal pensado y mal logrado* en las recientes reformas de la seguridad social y la salud pública en México. Veamos estos criterios uno por uno.

1. *Moralmente reprehensible y socialmente injusto*: primero en relación con la concepción ética del papel que debe tener el Estado en la sociedad: existen derechos sociales históricamente conquistados, y que las reformas han cancelado. Se trata de los principios revolucionarios de reparto de los más ricos a los más pobres, combinado con una concepción de la democracia como obligatoriamente social. En ambos sentidos, la autora considera que los últimos tres sexenios de nuestra historia nacional han traicionado estos ideales.

2. *Moralmente reprehensible*: porque los gobiernos que llevaron a cabo estas reformas las presentaron engañosamente ante la gente como mejoras en relación con lo que había antes, cuando en realidad los beneficios han sido recortados, y los grandes beneficiarios resultan ser los grandes consorcios financieros internacionales, las compañías de seguros y las HMO [Health Maintenance Organizations] norteamericanas en busca de dividendos que ya se agotaron en su propio territorio nacional. A la racionalidad de costo y beneficio individual y de corto plazo, la autora opone los principios de racionalidad basada en valores y a largo plazo, misma que debe poner freno a los apetitos de lucro que caracteriza a los mercados altamente monopolizados de nuestros tiempos. Esta racionalidad le compete al Estado, mismo que se ha visto mermado por las mismas reformas, y, por lo tanto, incapaz de hacer frente a su papel regulador.

* El Colegio de México.

3. *Técnicamente mal pensadas*: la autora afirma que las reformas que en su momento se presentaron como las únicas alternativas, no lo eran en realidad. Había (y sigue habiendo) alternativas, pero no fueron ni planteadas públicamente, ni debatidas en foros abiertos, ni objeto de deliberaciones colectivas en la sociedad como hubiera sido justo (y, agregó, democrático). Por lo tanto, las decisiones fueron tomadas sin racionalidad técnica, es decir, sin comparar sistemáticamente los costos y beneficios previsibles de las fórmulas alternativas. De hecho, la decisión se había tomado desde la campaña del ex presidente Ernesto Zedillo, mucho antes de que se escribiera el *Diagnóstico* publicado escasos meses antes de la presentación en el Congreso de la Nueva Ley del IMSS, mismo que se redactó simultáneamente con esta propuesta de ley. En pocas palabras, todo fue orquestado y empaquetado como servicio "express".

¿Por qué sucedió así? Porque, dice el libro, los dirigentes fueron cegados por el espejismo del neoliberalismo y se lanzaron *al aventón* (más bien NOS lanzaron *al aventón*) en una vía que suponía restablecer el orden financiero y la justicia social, y que no logró ni una cosa ni la otra. El reclamo implícito que hace la autora aquí es a la falta de representatividad social de las decisiones que se toman: "el régimen político corporativo y de partido de Estado impidió la plena realización de los compromisos sociales de la constitución al dificultar la representación auténtica de las fuerzas en conflicto, hecho que significó una negociación subordinada y diferenciada de satisfacción de necesidades, que finalmente obstaculizó la real modernización del país" (p. 24).

¿Había alternativas? Sí, dice la autora, pero proponer y defenderlas depende de cuáles sean nuestras prioridades: había 750 mil millones para Fobaproa en 1999 y 7.2 mil millones para Progresá (p. 31). Se invocan los principios del mercado para los obreros, pero las afores cobran sus comisiones de entre 21 y 26% sobre el capital depositado, e inclusive en las cuentas no activas (*ojo*: en ningún país capitalista avanzado se cobran impuestos sobre el capital, sino sobre las ganancias en el capital, por lo que esto no obedece a principios de mercado, sino de capitalismo sin frenos. Los ciudadanos mexicanos pagaron estas prioridades con los recortes en servicios públicos y con impuestos adicionales para recuperar las pérdidas causadas por los malos negocios de los bancos privados vendidos a los amigos de Carlos Salinas. También agregaré un dato muy jugoso proporcionado por una investigación reciente: los ultrapobres, los que no tienen seguridad social ni empleo, y que se suponen los únicos protegidos bajo principios neoliberales, en realidad están pagando MÁS por sus servicios de salud (los proporcionados a población abierta) en comparación con los afiliados a la seguridad social, medido en términos de gastos de bolsillo (en transporte, consulta, pruebas de laboratorio, medicamentos). Esto se basa en una de las encuestas nacionales de salud, con una muestra de varios miles de individuos.

4. *Mal logrado*: también porque le queda muy claro a Cristina Laurell que hay un abismo entre el discurso reformador del gobierno y los resultados obtenidos:

- el nivel de pobreza ha aumentado en forma pavorosa,
- las leyes laborales no se respetan,
- no hay seguridad alimentaria ni a nivel nacional ni a nivel de los hogares,

—las instituciones públicas se han deteriorado al grado de ya no poder ofrecer más que servicios de bajísima calidad proporcionados por trabajadores sobrecargados de trabajo. Todo esto le parece, además, fríamente calculado para facilitar la entrada de la iniciativa privada en los ámbitos de la salud y la jubilación.

Yo no voy a repasar todos los detalles de los programas y las medidas presentados en el libro, que me parecen bastante bien ilustrados, y los invito a que los lean con atención. Por ser un libro polémico y de circulación general, se omiten muchas explicaciones de carácter técnico, pero el lector que quiera saber algo más encontrará suficientes notas al pie de página, y una buena bibliografía. Vale la pena resaltar la capacidad de la autora para relacionar en forma sintética lo sucedido en la política social: “estamos ante una triple “falla” de las fuentes de bienestar social—la familia, el estado y el mercado— que redundan en la desprotección crítica de un grupo numeroso de ciudadanos” (p. 38). Podemos ilustrar esta aseveración con la situación de la mujer que se encuentra en el centro de este triángulo:

a) le falla el mercado porque su marido no gana (o no le da) lo suficiente para el gasto cotidiano.

b) le falla el Estado cuando trata de remediar esta situación, porque sigue sin ayuda para cuidar a los niños, pero sigue con la carga adicional del cuidado de los ancianos, que va a ir aumentando.

c) le vuelve a fallar el mercado, esta vez a ella, porque para poder cumplir a la vez sus tareas domésticas y ganar dinero, tiene que escoger trabajos marginados, precarios y mal pagados

d) y finalmente le falla la familia también, porque muchas veces el compañero se rehúsa a compartir más igualitariamente las tareas domésticas, y no pocas veces reacciona con violencia y abandono a todos estos cambios. Todo esto crea presiones extraordinarias sobre las familias y las comunidades que habían integrado la sociedad, con el resultado de que el índice de abandono de hogares, criminalidad y el consumo de alcohol y drogas ha aumentado vertiginosamente.

Antes de pasar a las propuestas concretas que ofrece la autora, quisiera introducir algunas observaciones críticas que matizan un poco las afirmaciones del libro.

1) Por ejemplo, la autora tiende a presentar el discurso gubernamental pre-reforma como algo que describe lo real, y al de la reforma como algo engañoso que la disfraza. Objetivamente, creo que ambos tienen algo de real y mucho de engañoso y manipulador. La revolución prometió muchas cosas y entregó pocas, muy tarde para la mayoría y en forma poco equitativa. La seguridad social jamás se volvió un derecho ciudadano universal, y el argumento usualmente dado en su defensa de que era de “tendencia universalista” me parece muy débil. La población entera de la república estuvo pagando para que la mitad tuviera el privilegio de ser asegurado.

2) Tampoco estaba todo en orden en la casa cuando llegaron los neoliberales. Salíamos de una borrachera de prosperidad petrolera que hablaba de acabar con la pobreza, e hizo algún progreso en esta dirección, pero adoptó una actitud de “*Après moi, le déluge*”, y, en efecto, el diluvio llegó. Teníamos una estructura productiva vetusta, con productos malos y caros, ampliamente subvencionada por el Estado. Sí, creaba más empleo que ahora, pero ¿por cuanto tiempo más? Había que hacer refor-

mas, pero se hicieron al vapor; se abrieron las fronteras en forma indiscriminada. Otra vez, un problema de mala planeación y mala instrumentación.

3) También quisiera cuestionar la afirmación de la autora de que nuestros dirigentes hayan sido doctrinariamente neoliberales y emprendido políticas para hacer realidad todos aquellos principios, como la subsidiaridad del Estado, el dominio del mercado y la subordinación absoluta a los dictados de los tecnócratas del FMI y del BM. Yo opino que nuestros dirigentes fueron extremadamente imprudentes (*e. g.*, basar todo el gasto público en las recetas petroleras cuando el precio internacional estaba muy inflado como en 1979-1982, o ponerse en una situación de no poder pagar las deudas de corto plazo de los Tesobonos si los inversionistas decidían no volver a depositar su capital en otra vuelta de Tesobonos, como en 1994). Una vez embarrados en una crisis, éstos siguieron las recetas que les ofrecían el clima internacional y los organismos internacionales que los rescataban. Nuestros “tecnócratas” no son ni muy buenos, ni muy “*resourceful*” como dicen los americanos. Creo que son más ineptos que doctrinarios. La mayoría calentó las bancas de excelentes universidades extranjeras (a costo de la nación), pero un tiempo mínimo (casi ninguno terminó su grado universitario), y la mayoría no tuvo experiencia suficiente en los rangos inferiores de la burocracia o en el aparato político. En realidad, fueron aprendices que no tenían mucha idea de cómo gobernar. Tuvimos una tontocracia combinada con cleptocracia, y la estamos pagando.

4) La intencionalidad dogmática imputable a en las medidas tomadas también debe matizarse. Simplemente se cometieron enormes errores, agravados por fraudes y rumores de fraudes (que ahuyentan a los ahorradores, al igual que los fraudes verdaderos). La ideología neoliberal estaba disponible para dar legitimidad a las reformas ética y socialmente poco aceptables que se hicieron para recortar el gasto social. Pero vale la pena recordar que México fue uno de los países del hemisferio que más recortó y más castigó a la salud y la seguridad social. Y allí mismo está claro que había alternativas, mismas que otros países igualmente involucrados en la deuda ejercieron, y que México pasó por alto.

La autora propone varias alternativas:

1) Para la seguridad social, propone la reinstalación de un sistema de reparto con una pensión mínima universal de un Salario Mínimo, independientemente de la situación laboral anterior, combinado con una pensión proporcional a las contribuciones.

2) Es justo que las mujeres, aunque no hayan contribuido en términos laborales formales, reciban una jubilación después de tantas labores domésticas y de crianza. También es ético y justo que los campesinos que trabajan la tierra toda su vida tengan una jubilación mínima asegurada. Aparte, “no es social y éticamente admisible que los costos de los problemas estructurales de la economía sean pagados por los individuos víctimas de esta situación” (p. 63).

Nadie puede estar en desacuerdo, en principio, con estas aseveraciones. Pero ponen sobre la mesa muchas preguntas difíciles de contestar. Si el pueblo no va a pagar las tonterías y deshonestidades de sus dirigentes, ¿quien las va a pagar? Santa Claus ya dijo que no quería, y el FMI dice que ya dio en 1995. Los dueños de los

bancos que hicieron desaparecer unos 60 mil millones de dólares del Fobaproa se salieron con la suya, y hasta con ganancias. Los políticos ilícitamente enriquecidos siguen en libertad (salvo Raúl Salinas), o prófugos. Los narcos salen de las prisiones de alta seguridad como de su casa.

¿Será posible construir una política social liberada de los errores y malas administraciones de la macroeconomía? Cristina dice que sí, y es un reto que debemos aceptar. Pero no debemos olvidar todos los *ceteris paribus* asociados con sus propuestas.

1) Por ejemplo, dice que es financieramente factible establecer el sistema de jubilación universal. Sí, pero a condición de que haya un promedio de aumento anual del 5% en el empleo. Actualmente estamos tan lejos de esta meta que estamos rezando para que no haya un crecimiento cero o negativo. Entonces hay que construir unos escenarios alternativos, como lo hace la Wharton School, para descubrir bajo qué condiciones macroeconómicas podremos alcanzar tal meta.

2) Otro aspecto que no se toca, pero que es crucial, es el tiempo de cotización: de sólo unos diez años en el antiguo sistema, y de 12 en el nuevo. Esto es muy duro en las condiciones del mercado laboral actual, cuando el empleo es poco remunerado e intermitente. Es más duro todavía para las mujeres que interrumpen su vida laboral en el momento de la crianza de niños preescolares. Pero ningún sistema de seguridad social puede sobrevivir cuando los cotizantes sólo aportan lo mínimo, y el resto del tiempo no son declarados, o son declarados por debajo de su nivel salarial real.

3) Esto nos lleva al fraude empresarial, el de siempre. Para minimizarlo, el Estado ha bajado cuanto ha podido la cotización empresarial, al mismo tiempo que ha aumentado la suya (o sea, con nuestros impuestos). ¿Será suficiente para bajar el nivel de fraudes? No parece plausible. En otros países (Argentina) donde se ha probado, esto ha fracasado. Según el INEGI (1998), actualmente, 24.4 de los 38.6 millones de trabajadores que representan la fuerza total de trabajo (o el 63.2% de la PEA) han estado trabajando sin ningún acceso a beneficios sociales de seguridad social, vivienda u otros. Dado que la proporción de los trabajadores sin empleo formal es del 37%, y ha permanecido relativamente estable, esto significa que un 26% de los empleados de empresas y negocios carece de protección social, o sea, son empleados en términos contrarios a la ley.

4) Un cuarto aspecto complementario del anterior es la laxidad con la que se aplican las leyes laborales. Son tan abiertamente violadas que no ha hecho falta llevar a cabo ninguna reforma laboral para asegurar la flexibilidad laboral, o sea, que los empresarios puedan contratar y despedir con facilidad, y sin tener que pagar compensaciones. ¿Quién pondrá orden en esto para que la nueva utopía pueda hacerse verdad?

5) Cristina Laurell dice que la seguridad social universal debe ser pública. Sí, porque es mucho más barato para la sociedad y para el beneficiario. Pero, ¿quién nos va a proteger contra la mala administración del Estado? ¿Quién nos va a defender contra los burócratas cleptómanos? En una democracia, el Estado debe ser *transparente y responsable* ante la ciudadanía y ante el Parlamento. ¿Lo será el Estado actual en que vivimos? ¿Alguien sabe cuáles son las principales propuestas del actual Plan

Nacional de Salud? ¿Lo han visto publicado? ¿Han leído editoriales sobre el tema? Las vamos a leer, pero sobre un producto terminado, con todas las comas y los puntos. No hay, ni va a haber un proceso de convocatoria de las fuerzas sociales para planificar, como en el modelo francés. Este plan permanecerá secreto hasta que se haya terminado de redactar.

Estos, y otros, son hechos de los que depende el éxito de políticas alternativas de seguridad social que nos ha propuesto Cristina Laurell en su libro, y que son las propuestas del PRD. No podemos discutir una cosa sin la otra. Un proyecto de seguridad social implica un proyecto de reforma del Estado en un sentido más socialmente responsable y democráticamente controlable. El papá gobierno ya se jubiló. Hay que construir uno nuevo, más íntegro y más respetuoso de las leyes, y que las haga respetar universalmente sobre todo el territorio, independientemente de la posición, la etnia, el sexo de los ciudadanos o la nacionalidad de los capitalistas. Este libro nos ayuda a pensar y deliberar sobre este proyecto ciudadano.

Rocío Guadarrama Olivera, *Los empresarios norteños en la sociedad y la política del México moderno. Sonora (1929-1988)*, México, UAM-Iztapalapa/El Colegio de México/El Colegio de Sonora, 2001, 293 pp.

MARÍA LUISA TARRÉS*

La sociedad y la política mexicana de principios del siglo XXI ya no son las mismas. *Los empresarios norteños en la sociedad y la política del México moderno* es una prueba de que esta afirmación que se percibe con nitidez en el ámbito nacional, se presenta también en los espacios estatales, regionales e incluso municipales. Y en efecto, el libro de Rocío Guadarrama no sólo contribuye a constatar la generalización de un cambio en las relaciones entre sociedad y política en el país sino que además enseña que este proceso adquiere modalidades de expresión, dimensiones y resultados particulares en las sociedades regionales. El análisis busca conocer los procesos de democratización del sistema político en el estado de Sonora, identificando a los empresarios medios y pequeños como los agentes más activos de estas transformaciones y remite, sin proponérselo siquiera, a la enorme heterogeneidad de actores que desde la sociedad civil han participado en la reestructuración de las formas de gobernar. Aún cuando el estilo que adquieren las transformaciones en Sonora se acerca a la de otros estados norteños donde el empresariado y las clases medias también han jugado un papel activo en sus comunidades, el trabajo de Guadarrama tiene el mérito de describir y precisar con una investigación acuciosa y de gran creatividad, las condiciones y la dinámica de la movilización de los sonorenses en torno al cambio del orden político.

* El Colegio de México.

El largo periodo de reformas estructurales, las diversas crisis y los ciclos de intensas movilizaciones sociales y políticas que transformaron las relaciones entre sociedad y estado, culminaron con las primeras elecciones presidenciales ganadas por un candidato de oposición el 2 de julio del 2000 a un partido que gobernó por más de setenta años. La alternancia política aparece como el hito que anuncia no sólo un cambio de régimen sino también el reconocimiento y la legitimidad de una sociedad que en forma persistente contribuyó a ese cambio. Esa transformación política cruzó el país en su geografía y en su estructura social y en ella participaron los más diversos actores, a veces usando novedosas formas organizativas, otras aprovechando los tradicionales espacios corporativos que se reformularon como plataformas para la oposición. Durante la década de los ochenta, hubo movilizaciones en Chihuahua, Baja California y Nuevo León que pusieron de manifiesto los conflictos derivados del sistema corporativo y mostraron a un nuevo sujeto sociopolítico de oposición: los empresarios. Aun cuando es menos conocido por la investigación contemporánea, fueron los empresarios sonorenses quienes emprendieron este tipo de movilizaciones por primera vez en 1976 cuando la administración de Luis Echeverría decreta la expropiación de las tierras del valle del Yaqui. Su actividad pionera, motivada por la defensa de la propiedad privada, la indignación ante decisiones generadas en la federación, en sus comienzos se expresa como una movilización alrededor de la defensa de privilegios, en un discurso conservador y antipopular. Ello hacía difícil prever que años después, este mismo sector lograría elaborar un discurso que aceptarían amplios sectores sociales convirtiéndose en el núcleo de movilizaciones democratizadoras en ese estado. Desprendiéndose de regionalismos y de sentimientos antifederalistas, los empresarios sonorenses lograron ofrecer una propuesta a la sociedad estatal que puso en jaque al autoritarismo de las elites que gobernaron ese estado durante todo el siglo xx.

Los empresarios norteños en la sociedad y la política en el México moderno de Rocío Guadarrama rescata y analiza la experiencia de una movilización encabezada por pequeños y medianos empresarios. A través de sus organizaciones gremiales, las asociaciones de productores, la cámara de comerciantes e industriales y los centros patronales de la Coparmex, buscan ocupar posiciones en el campo político regional y al mismo tiempo logran generalizar la necesidad de la implantación de un sistema democrático. Se trata del estudio de la constitución de los empresarios que como actores que reelaboran posturas ante el sistema político ofrecen nuevos códigos de relación social y proponen soluciones alternativas para gobernar. La perspectiva de análisis utilizada por la autora, permite abordar al empresariado, que normalmente ha sido concebido como un sector de propietarios, capitalistas cuya acción se reduce al interior, al rendimiento o la búsqueda de beneficios desde una perspectiva más compleja. Nos recuerda que la actividad empresarial es también producto de la historia y que en una región como Sonora además del interés por las ganancias, los empresarios han debido desarrollar una serie de habilidades sociales propias de la sociedad donde viven y trabajan.

Estos rasgos, tal como lo muestra el análisis de las biografías y de las historias familiares matizan los estereotipos sobre los empresarios pues los sonorenses desde

sus orígenes debieron colonizar y domesticar territorios desérticos para posteriormente hacerlos producir. En esas regiones broncas, el empresariado no sólo enfrenta los riesgos vinculados con el mercado, sino también la incertidumbre ante una geografía y una naturaleza adversas para la producción y la vida cotidiana. Quizás porque esta tarea es titánica y los fracasos son numerosos, aquellos que tienen éxito desarrollan un enorme apego a la tierra conquistada al desierto que se expresa en un orgullo y una seguridad individual y familiar particulares pues sobrepasan las convenciones sociales. Esta experiencia es compartida porque requiere del apoyo de lo que Guadarrama define como “clanes familiares”, que integran a varias generaciones unidas por redes de parentesco, genera imaginarios y una serie de mitos que moldean la identidad empresarial. Ese imaginario, como lo muestran las entrevistas realizadas por la autora, logra una enorme eficacia simbólica pues en él se asienta el compromiso del clan y además enmarca e influye en el comportamiento de sus miembros. Se trata entonces de imaginarios que si bien idealizan una situación, contribuyen a vincular eficazmente a los propietarios con su familia, sus tierras, sus bienes, y, sin duda, a consolidar la formación de una identidad empresarial colectiva con características específicas. El empresario sonoreense, sobre todo el pequeño y el mediano, ha enfrentado un medio hostil que lo estimula a colaborar con sus iguales, a buscar alianzas con el fin de negociar apoyos para el desarrollo de sus empresas y de las regiones con el gobierno federal. Esta situación favorece su conformación como actor colectivo y facilita su inserción en el ámbito de la política. Es por eso que cuando la elite política oficial ya no responde a sus necesidades de modernización y los conflictos no logran resolverse mediante pactos corporativos, el discurso y las prácticas hegemónicas que definieron al empresariado como parte del sistema tienden a resquebrajarse dando lugar a la formación de sectores disidentes. Así, los ciclos de la acción empresarial que históricamente estuvieron vinculados con los ritmos impuestos por el sistema político tienden a independizarse de éste gracias a la creación de grupos cuyas prácticas sociales y discursivas asumen una lógica distinta, autónoma.

El libro de Rocío Guadarrama analiza la historia de las diversas formas que asume esa autonomía en la arena electoral y política en los municipios y localidades, así como en las ciudades grandes. El Partido Acción Nacional (PAN) se constituye en el medio de expresión privilegiada de la oposición electoral de los empresarios, quienes, desde esa plataforma, son capaces de abrirse hacia la sociedad. El proceso es largo y Guadarrama muestra las modificaciones de las prácticas y del discurso empresarial. Así, en lugar de entrar al debate público para defender sus intereses particulares como lo hicieron a mediados de los setenta, en los ochenta elaboran un discurso democrático e incluyente que apela a intereses generales. El proceso de conversión del empresariado en un actor público democratizador se comprende claramente gracias al seguimiento que la autora realiza de su vida cotidiana. Es allí donde el lector aprende que los empresarios estudian, toman clases, se reúnen y debaten no sólo sobre los temas que les conciernen como productores o como grupo de interés sino también sobre asuntos generales. El texto analiza también cómo los activistas del PAN penetran en las escuelas de los empresarios y ejecutivos ofreciendo diplomados, cursos técnicos o administrativos con claras orientaciones ideológicas y

políticas. El trabajo político del PAN que tiene muchos años en el estado y que se realiza durante la era priísta, logra cristalizar como propuesta de los empresarios cuando se presentan las oportunidades políticas favorables gracias a la reforma política. Son estas circunstancias las que proporcionan la posibilidad institucional de hacer alianzas políticas eficaces, independientes del gobierno estatal.

Pero la contribución del libro va más allá del análisis de la conversión del empresariado en actor político. Muestra el proceso por medio del cual este sector logra convencer a grandes sectores sociales de ese estado de la necesidad de un cambio político. El libro analiza, con una claridad asombrosa, cómo la participación de actores y las movilizaciones sociales locales que se desarrollan en espacios de relación muy cotidianos, logran generar consensos y acuerdos mínimos alrededor de la demanda democrática. En este sentido, el libro se constituye en un reconocimiento a la sociedad civil, cuyo papel es olvidado cuando los procesos de transición a la democracia tienen éxito y los actores sociales son desplazados por los políticos.

Así, la investigación realizada por Guadarrama se aleja de la mayoría de las investigaciones sobre actores y movimientos sociales en la sociedad mexicana durante los últimos años. En efecto, la mayoría de ellas supone que la presencia de actores y movilizaciones de oposición al gobierno o a ciertas formas de dominación política indican por sí solas la presencia de una sociedad civil.

El trabajo de Rocío Guadarrama felizmente rompe con las concepciones basadas en el sentido común y se aboca con rigurosidad a investigar y a construir una interpretación que logra rescatar y dar significado a los orígenes y desarrollo de la sociedad civil en los términos que lo proponen las teorías disponibles sobre el tema. Su espacio es Sonora y su preocupación es comprender cómo los empresarios de esa entidad, vinculados históricamente con el sistema político corporativo poco a poco se distancian de sus controles hasta llegar a convertirse en una fuerza social y política que logra movilizar a importantes grupos provenientes de sectores populares y de clases medias en todo el estado.

Para Guadarrama, la sociedad civil es más que una manifestación de oposición al gobierno, pues la concibe como una realidad compleja cuyo análisis involucra diversas dimensiones y niveles. Así, en un primer momento, la considera desde una dimensión socio-histórica que privilegia la formación de espacios de interacción que permiten la creación de identidades, solidaridad y redes sociales entre los actores y movimientos sociales. En un segundo momento, la sociedad civil, formada por actores de diverso tipo, es conceptualizada como un ámbito cultural, lo que le permite, por un lado, analizar los argumentos elaborados por los actores para rechazar las formas tradicionales de acceder y ejercer el poder político, y, por el otro, destacar la forma en que se redefinen los códigos y discursos que identifican que lo valioso y bueno en la esfera política exige la presencia de un régimen democrático en los municipios, en los estados y en la federación. Finalmente, esta densa concepción permite comprender la forma en que se generaliza la acción colectiva originada en el seno del sector empresarial influyendo en los mecanismos de regulación político-institucionales. Esta lectura permite captar la complejidad de los procesos producidos por una acción colectiva que se generaliza en la sociedad sonorensis mostrando

con claridad que “el rayado de la cancha” tanto en la actividad electoral como en otras actividades políticas en el estado son distintas después de esas movilizaciones.

Con ese andamiaje teórico, la investigación empírica se orienta a desentrañar el significado de los procesos micro-sociales y estructurales en el comportamiento de los actores en diversos momentos de la historia regional.

La propuesta metodológica, basada en aproximaciones sucesivas, construye el objeto de estudio por niveles analíticos. Esta opción metodológica le permite combinar el estudio de trayectorias y discursos individuales, la formación de clanes familiares y redes socio-políticas sectoriales y regionales con el análisis de una serie de acciones colectivas parciales que se desarrollan en las regiones del estado en distintos periodos.

La investigación logra combinar con éxito fuentes documentales, archivos, periódicos locales, revistas de carácter político o cartas personales a las autoridades propias de la historia, con entrevistas a profundidad orientadas a elaborar historias de vida y a identificar los universos simbólicos que enmarcan acciones individuales y colectivas, observación de asambleas y movilizaciones, así como las estadísticas electorales, todas ellas técnicas provenientes de la tradición sociológica.

Esta mezcla de fuentes y técnicas de investigación distingue y le otorga características valiosas a este trabajo, pues a diferencia de la mayoría de los sociólogos que utilizan la historia elaborada por otros, la autora contribuye a la historia regional con material original de primera mano. Reúne así, y con éxito, su experiencia en la historia que, en el caso de este libro, beneficia su oficio como socióloga.

Pero más allá de los aportes teóricos y metodológicos, una virtud de este trabajo es la sencillez de su escritura. Este rasgo, fruto de una madurez en la investigación, es una ventaja que se expresa cuando revisa los aportes teóricos y cuando expone críticamente las distintas perspectivas de la acción colectiva y los movimientos sociales. Esa sencillez es posible porque la autora tiene claridad conceptual. Así se mueve con mucha facilidad entre dos opciones teóricas, la de la identidad y la movilización de recursos que, si bien durante mucho tiempo parecían irreconciliables, hoy se trabajan en forma complementaria. El desafío de Guadarrama consistió en generar un modelo alternativo que uniera estas dos teorías para explicar la formación y desarrollo de la acción colectiva empresarial en Sonora. El resultado del análisis es sin duda óptimo si se piensa que le permitió seguir una de las reglas básicas del método sociológico, esto es, explicar lo social por lo social, evitando adjudicar la causa de estas movilizaciones a las crisis económicas, a factores geográficos u otros, como lo hacen algunas investigaciones poco cuidadosas.

Por último, cabe destacar que esa sencillez en el lenguaje se expresa en las conclusiones donde además de presentar los principales hallazgos, desarrolla una reflexión crítica sobre su experiencia como investigadora que, inserta en una realidad ajena, trata de comprenderla y explicarla. Como cualquier investigación original con una escritura propia, el libro *Los empresarios norteños en la sociedad y la política del México moderno* plantea preguntas. Quizás por ser una investigación auténtica suscita dudas, sorprende o simplemente genera observaciones al lector. Después de leer el libro es claro que en Sonora se presentan formas novedosas de creación de

sociedad civil en la medida en que en sus orígenes están los empresarios regionales a los que posteriormente se suman otros sectores sociales. Los empresarios contribuyen a la modernización de un sistema político que dificultaba su participación, pero, al mismo tiempo, abren oportunidades de participación a actores y movimientos cuyas posiciones partidarias o ideológicas son distintas.

El libro también permite reflexionar sobre el significado del concepto de sociedad civil, pues lo “civil” en una sociedad es siempre parcial. En el espacio sonoreense, así como en el resto de la sociedad, no todos los conflictos sociales provienen de la relación con el Estado, es decir, hay problemas entre distintos grupos y sectores de la sociedad, porque los actores sociales y los actores institucionales deben continuar negociando y resolviendo tensiones, en fin, porque la presencia de civilidad en la sociedad apunta a la calidad de las relaciones sociales que construyen los diversos actores para convivir y por ende siempre pueden cambiar. El libro de Rocío Guadarrama indica, gracias a su riguroso trabajo de investigación, que más allá de un ideal normativo, la sociedad civil constituye una herramienta teórica que adquiere pertinencia para la interpretación sociológica cuando se asume en toda su complejidad. No es casual que este trabajo haya recibido el Premio Anual a la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades del año 2002, otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se trata de un premio merecido.

Ricardo A. Yocolevzky, *Chile: partidos políticos, democracia y dictadura, 1970-1990*, Santiago, FCE, 2002, 311 pp.

GILDA WALDMAN M.*

Durante los últimos años, y de manera paralela a la “ola democratizadora” que ha recorrido a América Latina en este periodo, uno de los temas más inquietantes en el ámbito de las Ciencias Sociales ha sido el problema de la democracia y la múltiple gama de aspectos que la componen. Así, por ejemplo, los historiadores se han preocupado por documentar las viejas y nuevas aspiraciones de diferentes grupos sociales por transformar su entorno social y político desde fines del siglo *xvi* hasta finales del *xx*, al tiempo que numerosos sociólogos y científicos políticos han realizado novedosas lecturas sobre las teorías de la democracia y las luchas sociales que ha implicado alcanzarla, reflexionando simultáneamente sobre el Estado y la sociedad civil. No es casual que ello ocurra. A la luz de fenómenos tales como la globalización, la creciente debilidad del Estado-Nación, los desequilibrios financieros, el narcotráfico, la inestabilidad política, la violación de los derechos humanos y la escasa vigencia de los derechos económicos y sociales de gran parte de la población, la discriminación de las minorías, el resurgir de los movimientos indígenas y los desafíos de la conviven-

* Universidad Nacional Autónoma de México.

cia multicultural, el desafío democrático se convierte en problema crucial para pensar, en cada uno de los países del continente, un proyecto futuro de nación. En el caso particular de Chile, el fin de la dictadura militar y el inicio de un régimen de transición implicaban también otro problema central: qué contenido darle a la democracia en un contexto en el que las herencias institucionales y morales de la dictadura militar seguían aun vigentes. Si bien el proceso de transición política se sustentó, en gran medida, sobre el principio de que en aras de la futura coexistencia pacífica caería el silencio sobre el reciente pasado dictatorial —con la consiguiente impunidad de los actos anti-democráticos cometidos— la concomitante apertura política significó abrir espacios para que en diversos ámbitos intelectuales, académicos y políticos la reproblematicación de la historia reciente del país se convirtiera en un debate continuamente reactivado. ¿Cómo y por qué se destruyó la estabilidad democrática en Chile el año 1973? ¿Cómo explicar la violencia del golpe militar? ¿Cuáles fueron los mecanismos políticos que posibilitaron el retorno de la democracia en Chile? ¿Existen elementos de continuidad entre el régimen político previo a 1973 y el actual? ¿Cómo caracterizar a éste? ¿Qué alcances tiene la democracia actual en Chile? Interrogantes como éstas —y otras— han explorado insistentemente la historia chilena de gran parte del siglo xx, exploración a la cual se agrega ahora el libro de Ricardo Yocolevzky, *Chile: partidos políticos, democracia y dictadura. 1970-1990*. Fruto de largos años de investigación, el texto mencionado re-lee la historia contemporánea de Chile a partir de lo que fuera un eje clave en su vida política: el sistema de partidos políticos como representación política e ideológica de fuerzas sociales que actúan de manera específica en diferentes momentos de los procesos políticos. En palabras del autor, “el construir el análisis a partir del sistema de partidos y su relación con los partidos que lo componen permite ver las condiciones reales en que los procesos se desenvuelven y por lo tanto, poner en evidencia un conjunto muy complejo de determinaciones a las que deben sujetarse los actores políticos privilegiados que son los partidos” (p. 12).

Si bien el análisis se centra en lo ocurrido entre los años 1970 y 1990, el recorrido histórico realizado por Yocolevzky se remonta a 1932, momento inicial de un largo periodo de estabilidad política sustentado en la existencia de un sistema de partidos —dirigidos por una elite profesional— y que, a pesar de representar fuerzas políticas y sociales distintas e incluso antagónicas, coincidían en torno a un proyecto de desarrollo nacional, industrializador y de carácter integrador. En la interpretación que ofrece Ricardo Yocolevzky, este proyecto llegó a un límite durante del gobierno de la Unidad Popular, agotada la capacidad de integración del sistema de partidos al surgir fuerzas alternativas y marginales extra-partidarias, tanto en la izquierda como en la derecha. En el primer caso, el gobierno de Salvador Allende logró subordinar a las fuerzas políticas que pretendían rebasar el entorno institucional, manteniendo así el sistema político como marco para la transformación social. En el segundo caso, por el contrario, predominaron los sectores rupturistas con el consiguiente golpe militar. Consumado éste, continúa señalando el autor, el objetivo central de la dictadura —y para lo cual se emplearon los más violentos mecanismos represivos— fue destruir el régimen político sustentado en el sistema de partidos, a fin de imponer

tanto un nuevo modelo económico como una nueva institucionalidad, de naturaleza autoritaria, que marginó casi totalmente a los partidos de la vida política del país. Lo anterior culminó en la Constitución de 1980. Pero el resquebrajamiento de la dictadura, ocurrido tanto por efecto de la crisis económica iniciada en 1981 como por las protestas populares realizadas durante 1983, abrió el espacio para un proceso de reconstrucción de los partidos políticos. En esta línea, la derecha se rearticuló en torno a dos grandes partidos que, si bien reconocían lo que a su juicio eran los logros de la dictadura, se orientaban a reemplazar a la dictadura en caso necesario y a desarrollar una democracia sustentada en la continuación del modelo de desarrollo económico impuesto por el régimen militar, de carácter excluyente (y no integrador, como en el periodo previo a 1973). A su vez, la formación de una alianza opositora estuvo liderada por el Partido Demócrata Cristiano que, si bien apoyó inicialmente al régimen militar sin comprender que el sentido último de éste era la destrucción del sistema político articulado en torno a los partidos, logró constituirse en el eje de la democracia “imponiendo a sus aliados de izquierda los resultados de su negociación con la dictadura” (pp. 29-30), es decir, un nuevo sistema institucional y un nuevo modelo económico.

El gran aporte del libro de Ricardo Yocelvezky para explicar una fase crucial de la historia chilena reciente reside en haber conjugado el eje institucional clave del sistema político chileno —el sistema de partidos— con lo ocurrido históricamente entre 1970 y 1990, es decir, en haber conjugado la dimensión estructural con la histórica. Ello permite ampliar el ángulo de visibilidad desde el cual se pueden comprender, por ejemplo, las fuerzas y movimientos que operaban desde los márgenes extra-institucionales durante el gobierno de la Unidad Popular (tema académicamente poco analizado), relativizando el impacto que factores externos de radicalización ideológica pudieron haber jugado en la ruptura del orden democrático en 1973. En la misma línea, el enfoque antes mencionado permite visualizar en detalle no sólo el significado del régimen militar como un corte profundo o ruptura con la institucionalidad política sustentada en el régimen de partidos, sino también los procesos de continuidad o ruptura entre los partidos existentes hasta 1973, y los que se reconstruyeron a partir de 1980. En este sentido, la evidencia empírica se inserta en un riguroso seguimiento histórico que ofrece aportes teóricos al campo de la Ciencia Política en el estudio de los procesos de ruptura y consolidación democráticas, así como en el tema de la declinación de algunos actores sociales y el surgimiento de otros nuevos.

No puede dejar de mencionarse que este libro resulta esclarecedor en torno a uno de los más importantes debates que recorren hoy las Ciencias Sociales: el cruce transdisciplinario. Desde un ángulo en el cual la existencia o desaparición del régimen de partidos en Chile se cruza con los modelos de desarrollo económico adoptados en diferentes etapas históricas, en el texto de Yocelvezky, la Ciencia Política y la Historia transgreden permanentemente sus límites, ubicando al análisis en una de las líneas más novedosas de las nuevas tendencias del quehacer reflexivo actual.

Chile: partidos políticos, democracia y dictadura. 1970-1990 es un libro que suscita diversas reflexiones. Por una parte, muestra que el estudio académico sobre los procesos de democratización puede ser permanentemente enriquecido y reabierto

a la discusión. Por la otra, el libro mencionado cobra plena actualidad en un momento en que Chile, como muchos otros países latinoamericanos, sufre una crisis de confianza en los partidos políticos. La reciente crisis de la alianza gubernamental —desatada por un escándalo de corrupción al interior del gobierno— ha evidenciado fisuras tanto al interior de la misma como dentro de los partidos que la conforman. Si bien es cierto que en Chile no existe un riesgo real de volver al conocido pasado de las botas militares, la democracia en este país está todavía permeada por las herencias institucionales y morales del régimen militar (el fantasma de la dictadura y la sombra de Pinochet siguen siendo una espina clavada en el corazón del sistema político). A lo anterior cabe agregar que la democracia chilena no ha logrado aun expresar de manera cabal e incluyente los intereses de toda la población, ni establecer una novedosa forma de relación política entre el Estado y los nuevos actores políticos que han emergido a últimas fechas en el espacio público (el movimiento indígena mapuche, por ejemplo), los cuales suman sus demandas específicas a las demandas tradicionales dirigidas al sistema político, desbordando los canales institucionales y poniendo de manifiesto la limitación de los partidos políticos para interpretar cabalmente el significado de estos fenómenos y asumir sus propias deficiencias como generadores de proyectos políticos. La crisis de representatividad de los partidos políticos, la creciente abstención electoral, el cuestionamiento a las concepciones políticas tradicionales, etc., son factores que pueden incrementar la pérdida de credibilidad en la democracia. Sin embargo, en un sistema democrático, los partidos son la forma de intermediación esencial con la sociedad, y no puede consolidarse ningún régimen democrático sin su presencia.

Pero más allá del presente y de las preguntas al futuro que plantea el libro de Ricardo Yocelvezky, éste constituye una forma en que los chilenos pueden re-encontrarse con su historia abriendo de nueva cuenta el debate en un país que parece ser, lamentablemente, desmemoriado.

Vicenc Navarro, *Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país*, Barcelona, Anagrama, 2002, 216 pp. [XXX Premio Anagrama de Ensayo].

MIGUEL ÁNGEL VITE PÉREZ*

El ensayo crítico del catalán Vicenc Navarro se articula bajo el argumento de que la democracia española es incompleta no solamente por sus déficit en lo relacionado con el bienestar social y las instituciones democráticas, sino también por la falta de reconocimiento, sin cortapisas, de la situación de los exiliados españoles, víctimas de la dictadura franquista, que también tuvieron su aporte en el proceso de democra-

* Estudiante de doctorado de la Universidad de Alicante (España).

tización de la vida pública española. Ahora que el estilo de gobernar, de acuerdo con el ideario de la derecha, se ha manifestado como una insuficiencia para generar bienestar social, también se muestra reacio a realizar, al mismo tiempo, un recordatorio público, lo que incluye el pedir perdón a las víctimas, a los que fueron perseguidos y asesinados durante el régimen dictatorial del general Francisco Franco.

De esta manera, comienza por poner en tela de juicio la idea de que “España va bien y Cataluña incluso va mejor”, lo que no se cumple por el déficit social que tiene como base no solamente el bajo nivel del gasto social sino “gran cantidad de oferta de trabajo con obra de mano mal pagada, inmigrante, y se piden unas cuotas exageradas de inmigración, a fin de crear una gran demanda de puestos de trabajo baratos que baje los salarios” (p. 65). Para Navarro, este hecho implica perpetuar la ineficiencia económica de España, al mantener los bajos salarios junto con los trabajos de baja calidad, como por ejemplo la realización de labores relacionadas con la asistencia domiciliaria a ancianos y personas con discapacidad, bajo una cultura machista que las considera como actividades desvalorizadas, realizadas, por lo común, por trabajadores inmigrantes.

Entonces, para Navarro, el retraso socioeconómico de España, en comparación con el resto de los países que integran la Unión Europea (UE), es resultado de la gran cantidad de personas adultas que no trabajan, debido a que no se facilita la integración de la mujer y de los jóvenes al mercado de trabajo. Esta situación podría solucionarse a través de un mayor desarrollo de los servicios sociales, sobre todo los relacionados con el cuidado de niños y ancianos, para permitir, por ejemplo, que la mujer tenga una mayor presencia en el mercado de trabajo (p. 69). Por eso, el autor propone lo siguiente: una extensión del Estado del bienestar, catalán y español, hacia toda la población española y no solamente limitarse al apoyo de programas de asistencia al inmigrante. Desde esta perspectiva, el Estado español tiene una baja inversión en infraestructura de capital físico y humano, lo que tiene consecuencias negativas sobre la cohesión social. Y esto ha sido ocultado, en mayor o menor medida, por los medios de información, lo que permite “alineación política hacia las instituciones democráticas y hacia los medios de información” (pp. 79-80).

La desigualdad social, entonces, como un factor negativo que impide la cohesión social, se ha reflejado en España en los años de vida, ya que los ricos viven más que los pobres; sin embargo, “en España [ha habido] una reducción del gasto público que se está realizando sobre todo a costa del gasto social y del gasto sanitario, que ha descendido (como porcentaje del PIB) desde 1994 a un 19.9% en el año 2000” (p. 92). Esto es producto de la creencia liberal, propia del pensamiento de la derecha, de que el éxito de la industria privada se ve fomentado limitando la participación del Estado, principio que se ha aplicado a los servicios de sanidad y a la misma educación; esto, en el largo plazo, según Navarro, termina por crear una polarización social que beneficia a los grupos sociales más privilegiados.

Si la economía de mercado no reduce las desigualdades sociales, el Estado español tampoco lo hace: “El Estado del bienestar español (que añade a la capacidad adquisitiva de la población española a través de transferencias y servicios públicos y sustrae de esa capacidad a través de impuestos y tasas) rebaja el nivel de pobreza

(definido como la mitad de la renta media del país) de un 28.2% de la población a un 10.4% reduciendo así la pobreza en un 63.1%. En comparación, el Estado del bienestar alemán reduce la pobreza en un 80.6%, el sueco en un 80.4%, el danés en un 72%, el holandés en un 70%, etc.” (p. 106). Pero, ¿dónde radica la causa de esta situación? Navarro responde que en la herencia histórica de 40 años de dictadura, lo que se refleja en la escasa equidad de las políticas públicas del Estado español y, por añadidura, en un mayor gasto en el financiamiento de las fuerzas represivas. Mientras, la flexibilidad laboral en España se ha logrado a costa de la ruptura de la seguridad laboral: “De ahí que España tenga las tasas de precariedad y de inseguridad más altas de Europa. Sin embargo, en el norte de Europa la flexibilidad laboral se da con la colaboración sindical, porque no supone inseguridad laboral” (p. 113).

Por otra parte, los medios de información españoles, según Navarro, se caracterizan por su falta de diversidad y su sesgo, lo que ha creado un distanciamiento entre ellos y la población. Esto se puede observar, según el autor, en la gran cantidad de gente que desea un incremento en el gasto público social, lo que se ha expresado mediante las encuestas, empero dicha petición no ha encontrado una cobertura destacada en ningún diario español importante. Pero lo grave es que la cultura mediática de España propaga que el desempleo es consecuencia de la rigidez del mercado laboral español, resultado del crecimiento de los salarios y de la protección social, lo que se supone inhibe la inversión empresarial. Esto es otra causa, según el autor, del empobrecimiento de la democracia española y es también otra evidencia de un giro a favor de las tesis del pensamiento neoliberal.¹

Sin embargo, en España todo ciudadano tiene derecho a la sanidad, a la educación y a la pensión, pero no hay derecho a la infraestructura de servicios de ayuda a las familias, lo cual se refleja en una sobrecarga para las mismas, es decir, para las mujeres, lo que ha generado, como consecuencia, una baja participación de la mujer en el mercado de trabajo y en su baja fertilidad. Por lo tanto, Navarro concluye que “si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en tales servicios (así como en sanidad y educación) que tienen los países donde tales derechos son universales, España tendría pleno empleo” (p. 143).

Pero, también, en el ensayo de Navarro, llama la atención el análisis que realiza sobre la supuesta derechización de España. Esta situación se debe a la existencia de uno de los sistemas electorales más discriminatorios contra las izquierdas, pero tam-

¹ Esto se puede verificar en la “Decimosegunda Cumbre Iberoamericana”, celebrada en Playa Bávaro, en República Dominicana, donde los gobiernos de España y Portugal defendieron los intereses económicos, expresados en proteccionismo y subsidios a sus productos agrícolas, de la UE y de Estados Unidos, en perjuicio de los países latinoamericanos, muy acorde con las políticas neoliberales promovidas por Bruselas y Washington: “El bloque formado por Madrid y Lisboa, englobados en el concepto de Iberoamérica, intenta demostrar un interés común que está lejos de corresponder a los hechos, que nos muestran, por el contrario, a las ex colonias latinoamericanas como nuevo ‘oscuro objeto del deseo’ del neocolonialismo del gobierno de la derecha española presidido por el neofranquista Aznar” (“Ibéricos versus América Latina”, “Editorial”, *La Jornada*, México, 16 de noviembre de 2002).

bién al descenso del voto de izquierdas (9% del censo electoral como resultado de la abstención), y del paso de votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU) al Partido Popular (PP). El PP ha incrementado su presencia entre los obreros descalificados que han encontrado justificación a su precariedad en la presencia de los trabajadores extranjeros; por lo tanto, sienten afinidad con las políticas de inmigración hostiles a los inmigrantes extranjeros promovidas por el PP (p. 155). Al mismo tiempo, establece que las derechas en la dictadura franquista tuvieron una mayor presencia, al igual que en la etapa de la transición, manteniendo en una posición de debilidad a la izquierda: “la transición se realizó en términos favorables a las derechas, con lo cual las instituciones y reglas democráticas en nuestro país están sesgadas hacia las derechas” (p. 169). “Mientras, los medios de información no tienen sensibilidad democrática por mostrar un unánime aplauso a la monarquía, con ausencia de crítica hacia el monarca, lo que, hasta cierto punto, reproduce la cultura cortesana” (p. 171).

Existe, pues, una transición incompleta en España, donde no ha habido una reconciliación entre el reconocimiento y la corrección de errores, que fueron mayores entre los vencedores que entre los vencidos (p. 190). Es esto una consecuencia del dominio de la derecha en el proceso de transición democrática y su conservadurismo expresado en la cultura política y mediática. Asimismo, “El supuesto “centro” español y el “centro” catalán no sólo no han hecho suyas tales propuestas de gravar los superbeneficios de las empresas privatizadas, sino que, al contrario, han aprobado políticas en sentido opuesto, favoreciendo la desgravación de los beneficios de tales empresas privatizadas, y ofreciéndoles además incentivos, como ha sucedido con las compañías eléctricas, a las que se les ha otorgado una subvención de 7 000 millones de euros” (pp. 191-192). Este hecho muestra la fortaleza de la derecha española; lo mismo sucede, en el momento de falsear, según Navarro, la historia de lo que fue el franquismo: un régimen represivo.

Por lo tanto, Navarro concluye que la transición de la dictadura a la democracia no fue modélica porque el Estado no ha pedido perdón oficialmente a las víctimas de asesinatos políticos realizados durante la dictadura. De este modo, Navarro relaciona el olvido histórico, la democracia incompleta y el insuficiente Estado del bienestar como los hechos que impiden que en la España de hoy sus instituciones expresen los deseos de la ciudadanía y favorezcan la ampliación del Estado del bienestar. De esta manera, después de la lectura de este libro, queda claro que el modelo de la democracia española no debe tomarse como paradigmático, sobre todo cuando se hace alusión al [in]cumplimiento de los objetivos de bienestar social, objetivos que, pese a la doctrina neoliberal, son parte importante de una sociedad moderna, y que la derecha busca, sin embargo, cumplir de manera parcial, mercantilizando cada vez más dichos objetivos, al permitir una mayor presencia de la empresa privada.²

² Véase Gösta Esping-Andersen, *Los Tres Mundos del Estado de Bienestar*, Valencia, Ediciones Alfons El Magnánim/Institució Valenciana D'Estudis i Investigació, 1993.

